Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 125 de la Constitución Española establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, dispone en su artículo 101 respecto de la acción popular que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas podrán ejercer de la acción popular si existe una norma autonómica que lo autorice.

La Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, ha demostrado ser, desde su vigencia, un instrumento útil para la consecución de los objetivos que se marcaba en su exposición de motivos: llevar al ordenamiento jurídico la expresión de la más enérgica condena del terrorismo, la absoluta solidaridad con todas las víctimas, la necesidad de solventar, en lo posible, la deuda que la sociedad tiene con ellas, y por supuesto, la conservación común de su memoria y su dignidad.

De esta forma, en la ley se introdujo un capítulo IX donde se regulan las distinciones honoríficas y las actuaciones dirigidas a favorecer, apoyar y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo.

No obstante, transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la ley, se ha visto la necesidad de modificar este capítulo con objeto de ampliar la protección que ofrece en relación con la memoria y dignidad de las víctimas.

La protección de esta memoria no sería completa si no se persiguieran activamente determinados hechos, de enaltecimiento de los delitos de terrorismo o de humillación de las víctimas, que nuestro código penal tipifica en el artículo

578 como delitos, y que constituyen auténticos atentados contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.

Por lo tanto, con el fin de coadyuvar en el ejercicio de la acción penal, por medio de esta ley se introduce en el capítulo IX de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, un artículo 25 bis que otorga un título de legitimación a la Comunidad de Madrid para personarse en los procedimientos por los citados delitos como acusación popular.

La reciente creación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas es muestra de la renovación del compromiso asumido por la Comunidad de Madrid con las víctimas del terrorismo, tanto desde un punto de vista material como moral, a lo que se añade ahora, con esta ley, la habilitación para actuar contra quienes atacan y humillan a las víctimas o contra quienes enaltecen a los terroristas.

II

Los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son observados en el contenido y tramitación seguida por esta ley. Los principios de necesidad y eficacia quedan salvaguardados, ya que el contenido de la ley proporciona los instrumentos más adecuados para la promoción de las razones de interés general que se persiguen: protección de la memoria de las víctimas del terrorismo. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la ley que se aprueba es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional, como de la Unión Europea y conforme al de proporcionalidad, incluye tan solo la regulación imprescindible, sin imponer a los ciudadanos ni obligaciones ni medidas restrictivas de derechos. Su contenido es acorde también con el principio de eficiencia, ya que su aprobación no supone el establecimiento de cargas administrativas innecesarias a los ciudadanos y se supedita plenamente al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Por último, en aplicación del principio de transparencia, la Comunidad de Madrid ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de la ley a través de los procedimientos de consulta pública y de audiencia e información públicas.

III

Esta ley se dicta al amparo de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 7.4, en consonancia con el artículo 9.3 de la Constitución Española, establece que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En particular, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid competencia exclusiva para la ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención (artículo 26.1.23) como medio para hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños (artículo 1.3).

Artículo único. *Modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.*

Se introduce un artículo 25 bis con el siguiente tenor literal:

“Artículo 25 bis. *Acción popular.*

La Comunidad de Madrid ejercerá la acción popular en los procedimientos penales seguidos por enaltecimiento o justificación públicos de los delitos de terrorismo, así como por actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal”.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»